www.elboomeran.com

JAVIER PRADERA

LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA Y LA DEMOCRACIA

Edición e introducción de
JOAQUÍN ESTEFANÍA

CENTZONTLE
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

Primera edición, 2014

Pradera, Javier
La Transición española y la democracia / Javier Pradera ; ed. e introd. de Joaquín Estefanía. – Madrid : FCE, 2014
164 p. ; 17 x 11 cm – (Colec. Centzontle)
ISBN: 978-84-375-0722-4

1. Democracia – España – Siglo XX – XXI 2. España – Política y Gobierno – Siglo XXI 4. España – Aspectos económicos – Siglo XXI I. Estefanía, Joaquín, ed. II. Ser. III. t.

LC DP272 Dewey 320.946 P665t

© 2014, Natalia Rodríguez-Salmones Cabezas
© 2014, de la edición y de la introducción, Joaquín Estefanía

D.R. © 2014, Fondo de Cultura Económica de España, S.L.
Vía de los Poblados, 17, 4.º-15. 28033 Madrid
editor@fondodeculturaeconomica.es
www.fondodeculturaeconomica.es

Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D.F.
www.fondodeculturaeconomica.com
Empresa certificada: ISO 9001:2008

Diseño de portada: Leo G. Navarro

Maquetación: Erai Producción Gráfica
Impresión y encuadernación: Digital Agrupem

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra –incluido el diseño tipográfico y de portada–, sea cual fuere el medio, electrónico o mecánico, sin el consentimiento por escrito del editor.

ISBN: 978-84-375-0722-4
Depósito Legal: M-32104-2014

Impreso en España

Sumario

La Transición realmente existente y la Transición perfecta, por Joaquín Estefanía ✣ 7

Textos citados ✣ 47

La Transición en España ✣ 49

Una cronología de la Transición ✣ 109

Los elementos básicos de la política económica. 1974-1984 ✣ 118

Una nueva visión de la guerra civil ✣ 123

Índice general ✣ 163

La Transición realmente existente y la Transición perfecta

Las razones de volver

Por qué volver a escribir sobre ese periodo histórico de la Transición de una dictadura a la democracia en un país como España. A qué se debe que se editen tantos textos sobre esa suma de acontecimientos que transformó un tiempo y un país y ocupó el último cuarto del siglo xx, una etapa que todavía está muy cercana y bastantes de sus protagonistas permanecen entre nosotros. Para qué hacerlo si el consenso de los expertos concluyó que no existen modelos preestablecidos de transición, que no existe una plantilla rígida a la que puedan recurrir los países autoritarios o totalitarios que desean recuperar, o iniciar, un régimen de libertades y un modelo social con bienestar. España y Portugal, los dos países de la península ibérica cuyos regímenes autoritarios tenían muchas similitudes y que se transformaron más o menos en el mismo momento (un poco antes Portugal que España), tuvieron transiciones bastante diferentes, basadas en correlaciones

de fuerzas distintas. En cada caso hay características irrepetibles como para pretender universalizar un esquema de transición. Luego llegaremos a Huntington y a su teoría de las olas de transición.

Sin embargo, la Transición española (TE) tiene elementos útiles para quienes viven un cambio de régimen desde sociedades cerradas a sociedades abiertas. Como escribe Javier Pradera en uno de los textos que nos convoca, uno de esos elementos es la transformación de la cultura política «desde el enfrentamiento violento hacia el diálogo tolerante, la voluntad de acuerdo, la negativa a transformar al adversario en enemigo, la capacidad por abstraer del presente las ofensas recibidas en el pasado —en forma de años de cárcel, de torturas o de pérdida de seres queridos—, el estudio de la historia para no repetir los errores y la orientación hacia el futuro». Es mucho.

El estudio de la historia. Sus buenos profesionales, los historiadores honestos, aquellos que en sus investigaciones no pretenden manipular el pasado para dar explicaciones falsas sobre el presente, se basan en las reflexiones de George Orwell: quienes pretenden controlar el pasado perdieron el futuro, como perderán el pasado quienes pretendan controlar el presente al modo de comisarios de la memoria. Lo perderán porque lo habrán reducido a una dimensión puramente instrumental, a la mera legitimación o deslegitimación del presente. Pues bien, esos historiadores —entre los que se incluye, por propio derecho, Santos Juliá, uno de los mejores estudiosos de la Transición española, a

quien se debe ese recuerdo de Orwell— entienden que la reinterpretación del pasado se modifica de modo continuo, adaptándose a las nuevas informaciones recibidas o elaboradas, y a las nuevas preguntas que se formulan las generaciones siguientes. Más o menos cada cuarto de siglo se mira hacia atrás, se conmemora lo sucedido, se celebra o se lamenta, pero los datos y las emociones —las sensibilidades— ya no son las mismas.

Es evidente que hoy existe una nueva mirada sobre la TE, dentro y fuera de España (sobre todo, en América Latina), como también ocurrió sobre la guerra civil o el franquismo. Es una mirada más crítica, la de los hijos de los que la protagonizaron, que se interrogan sobre sus deficiencias y sus logros, sobre el papel que jugaron sus progenitores, sobre las limitaciones de su actuación y sus aportaciones, y por qué muchos de ellos convirtieron su programa mínimo en el programa máximo de sus vidas: obtener una democracia de la mayor calidad posible, olvidándose al tiempo de otras utopías que les movilizaron previamente (el comunismo o el socialismo), o porque las llegaron a considerar utopías regresivas (distopías), o porque en los lugares en los que se aplicaron trajeron el infierno a la Tierra, o porque entendieron que la correlación de fuerzas las hacía imposibles de lograr. Los sucesores de los protagonistas tienen todo el derecho a hacer su propio relato de lo ocurrido en España entre la muerte de Franco (año 1975) y la llegada de los socialistas al poder (1982), el septenio de la Transición. Disponen

de la mayor parte de los datos para ello y un número casi infinito de análisis desde todos los puntos de vista, desde la derecha a la izquierda: apenas quedan secretos u ocultaciones del periodo. Lo que pueden cambiar son las interpretaciones.

Algo así es lo que hace Javier Pradera con el texto «Una nueva visión de la guerra civil», aparecido en 2010 (en Antonio López Pina, *La generación del 56*, Madrid, Marcial Pons, 2010). Lo escribe en el contexto de una investigación sobre la llamada «generación del 56» que tuvo lugar en el Senado mediante un ciclo de conferencias. En febrero del año 1956 se producen unos incidentes en la Universidad de Madrid, con graves consecuencias pese a ser minoritarios, en los que el régimen franquista se encuentra frente a una generación joven que, sobre todo, quería escribir una España a su medida. La «generación del 56» es una demostración de que el franquismo no fue un tiempo de silencio; sus componentes querían regenerar España mediante la secularización en libertad de la cultura, el Estado y el Derecho. Tras el fracaso de la Huelga Nacional Pacífica de 1959, auspiciada por el Partido Comunista de España, la vanguardia cifró sus aspiraciones en la homologación de nuestro país a las democracias vecinas y su integración en la Comunidad Europea. Dicho alineamiento con Europa Occidental marcará el rumbo histórico y acabará siendo el proyecto que, con todas sus ambigüedades, cristalizará en 1977. El germen de la TE y de la integración de España en el capitalismo occidental consta ya en la «generación del 56». Cuando

la policía de Franco detiene a siete de sus principales instigadores, cinco de ellos estaban vinculados con los vencedores de la guerra civil por su historial personal o familiar (Dionisio Ridruejo, coautor del *Cara al sol* y voluntario en la División Azul; Miguel Sánchez Mazas, primogénito de un fundador de la Falange; José María Ruiz Gallardón, hijo de un amigo personal de Franco; Gabriel Elorriaga, aspirante a ser designado jefe nacional del sindicato falangista; y Javier Pradera, hijo y nieto de fusilados al comienzo de la cruzada).

Los hijos de la Transición corren el riesgo de caer en el mismo equívoco que algunos de los nietos de la guerra civil y del franquismo: entender que existe una única memoria sobre los dramáticos sucesos que partieron en dos un país y a sus ciudadanos. Poseen precedentes para no caer en la trampa y no llamar memoria histórica a lo que no son sino representaciones, relatos que cada uno de nosotros, aquí y ahora, construimos sobre un pasado del que no tenemos experiencia y del que no podemos conservar memoria personal porque no habíamos nacido. Yo puedo tener memoria de la Transición, pero no de las dos guerras mundiales, del estallido de las primeras bombas atómicas, o de la guerra civil en España. Porque viví la primera y no las demás. De lo que en verdad tenemos memoria es de las ideologías, de los relatos e interpretaciones leídas en libros y tebeos, de las películas vistas, de las abundantísimas exposiciones fotográficas, de los ensayos construidos para dar cuenta de aquello. Escribe Santos Juliá que las huellas del pasado, por muy traumático

que este sea, permanecen en el presente, sometidas a las reinterpretaciones que impone el paso del tiempo, la acumulación de nuevos datos y hechos y la aparición en el debate público de nuevas generaciones. «Las huellas del pasado no son como registros del ordenador, siempre idénticas a sí mismas, sino que se reinterpretan continuamente; son como trazos que los hechos han dejado para ser interpretados y analizados más adelante».

Consciente de ello, Pradera advierte de los intentos de fusionar en una sola memoria colectiva, democrática o antifascista, las diversas estrategias generadas por la guerra. Combate en sus textos las dos interpretaciones canónicas de la guerra civil, que «podrían resumirse de forma caricaturesca en dos formulaciones encontradas donde las dimensiones internacionales representarían un papel predominante». Desde el lado republicano sería descrita como consecuencia de un fracasado cuartelazo militar sin el más mínimo respaldo social, que la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini incitaron y aprovecharon mediante sus decisivas ayudas en recursos humanos, armamentísticos y materiales a fin de hacer el «ensayo general con todo» de la segunda guerra mundial y de implantar en la península otro régimen fascista. Desde el lado franquista sería interpretada como un alzamiento nacional popular de carácter defensivo, iniciado por el ejército para impedir preventivamente una revolución comunista planeada a fecha fija, y bendecido por la Iglesia católica como una cruzada para evitar la descristiani-

zación de España, que se prolongó casi tres años por la intervención de la Unión Soviética. Dionisio Ridruejo, ese falangista pasado a las filas demócratas, escribió sobre «quienes prefieren explicarse los hechos históricos como un cuento de hadas o de ogros, o como una película del Far West». La «generación del 56», a la que Pradera pertenece, sería una muestra de los procesos convergentes desde el lado de los vencedores y desde el lado de los vencidos, que llevaron a una nueva visión de la guerra civil, alejada de las interpretaciones maniqueas generadas en ambos bandos durante la contienda, y sensible a las dimensiones trágicas de un conflicto cainita que hubiera debido evitarse.

El revisionismo

Dentro de esa nueva mirada sobre la TE hay una corriente revisionista que atribuye los males del presente a los defectos de aquella. En una coyuntura en la que, cuando se inicia la segunda década del siglo xxi, España atraviesa la peor crisis de las últimas cuatro décadas, con problemas de naturaleza económica (empobrecimiento, desigualdad, debilitamiento de las clases medias, paro masivo,…), política (incapacidad de los partidos políticos de ponerse de acuerdo al menos en un diagnóstico común y en las prioridades que acometer, corrupción, nepotismo,…) e institucional (muchas de las instituciones de las que nos dotamos para convivir

se han quedado viejas o están inservibles por el abuso partidista que se ha hecho de las mismas), ese revisionismo arroja las responsabilidades de lo acontecido al diseño y desarrollo de la TE.

Al contrario que otros revisionismos históricos, este proviene, sobre todo, de una parte de la izquierda. El escritor Javier Cercas, que ha construido un sólido relato de uno de los acontecimientos centrales de la TE (el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981), ha descrito con ironía ese modo de ver las cosas: ¿quién tiene la culpa de la ínfima calidad de nuestra democracia?: la Transición. ¿Por qué nuestra democracia amenaza con convertirse en una partitocracia? Por la Transición. ¿A qué se debe el pésimo funcionamiento de nuestra Justicia? También a la Transición. ¿Cuál es el origen de la crisis económica? Cuál va ser: la Transición. ¿Y de la llamada crisis moral? La Transición también. ¿Y del llamado problema catalán? La Transición, la Transición, la Transición. «De todo tiene la culpa la Transición, o sea: de todo tienen la culpa papá y mamá, que fueron quienes hicieron la Transición. ¿Cuánto tiempo hace de la Transición? Una eternidad. ¿Y en todo este tiempo que hemos hecho nosotros? ¿Mejorar la precaria democracia que alumbró la Transición hasta convertirla en una democracia saludable, o tumbarnos a la bartola y dejar que aquella democracia se pudriese? ¿De verdad no hemos tenido tiempo en estos 30 años de hacer bien lo que entonces se hizo mal? ¿De verdad no somos responsables de nuestras desgracias y podemos seguir achacándolas a papá y a mamá? La Tran-

sición no fue perfecta; eso solo lo piensa esa derecha que intenta monopolizar la Transición y esa izquierda que ignora que la Transición también (o sobre todo) la hizo la izquierda».

También Pradera, en los dos textos que conforman este libro, llama la atención sobre el peligro de proyectar sobre el pasado las realidades del presente, la tendencia a atribuir la situación de hoy (en este caso, pésima) a los impulsos causales de un pasado generalmente no remoto. Cuando se unen tres crisis tan potentes (la económica, la política, la institucional) en un mismo momento histórico, y engendran amplia desafección en una ciudadanía que, en su mayor parte, solo ha conocido una democracia de última hora, adolescente, con limitaciones, después de un largo periodo de dictadura, se corre el riesgo de que haya una fuerte corriente de opinión que trate de desplazar las dificultades del ahora a los vericuetos de ayer, transformando —intencionadamente o no— el pasado. Allí, en la TE, estaría el germen del empobrecimiento y la desigualdad, de una justicia lenta y politizada, de la ausencia de transparencia del sector público, del bipartidismo imperfecto, del enorme número de aforados en relación a los países de nuestro entorno, de la concentración de poder en los aparatos de las formaciones políticas, de la anemia parlamentaria, de la corrupción, etcétera. La TE como última responsable de la baja calidad de la democracia de nuestro país, por la hegemonía de un consenso entre desiguales que plasmó un pacto de amnesia en la segunda parte de la década de los setenta

y principios de los ochenta: nosotros os permitimos avanzar en las reformas y en una especie de democracia (vigilada) y vosotros os olvidáis de los crímenes y las brutalidades de tres décadas y media de nacionalcatolicismo. La consecuencia directa de ese pacto implícito sería una democracia deficitaria, con una cultura que difícilmente se podría calificar de democrática. Las limitaciones, ciertas o inventadas, de la Transición habrían facilitado los vicios de la democracia existente.

Un ejemplo, escogido al azar, de esta versión de la historia lo proporciona un artículo aparecido en *El País* —el diario español de referencia de la Transición—, escrito por alguien que inequívocamente pertenece al campo de la democracia. En él se hace la siguiente metáfora: cuando una soga no aguanta más se rompe poco a poco; no es una ruptura limpia, como la que lograría un golpe de hacha, sino un proceso más lento, más sucio. Los cabos de cuerda se van rompiendo de uno en uno, exhaustos de contribuir al esfuerzo de conformar la soga, de resistir con ella. Cada rotura en sí misma no es grave, lo grave es la suma de los cabos sueltos, y en España se han roto demasiados en los últimos tiempos.

Es difícil no estar de acuerdo hasta aquí. Hasta este punto funciona la cadena causal; luego hay una ruptura dialéctica. A partir de ese momento, una fuga hacia delante: para el autor, que no es sospechoso de conspiraciones antidemocráticas, lo más duro no son los escándalos de cada día, las ineficacias, los abusos,… «lo más duro es escuchar a esos dirigentes que afirman

con una sonrisa que esto ha pasado siempre, que pasa en todas partes, que lo sabe todo el mundo. Esos dirigentes que repiten como loritos el cuento de nuestra admirable Transición, de nuestra maravillosa Constitución, de nuestra heroica entereza y, más difícil todavía, de nuestra formidable capacidad para salir juntos, unidos aunque diferentes, de cualquier cosa». En este salto al vacío (de la soga que se rompe poco a poco a la inmaculada Transición) se juntan las peras y las manzanas con el objetivo de desacreditar el pasado y con él, a sus protagonistas. ¿Por qué?

Si se asume el esquema de este artículo, ¿qué responsabilidades quedarían para los gestores de esa triple crisis, para los dirigentes (políticos, económicos,…) y el *establishment* intelectual de la postransición, de la normalidad democrática, si hiciesen lo que hiciesen los resultados venían predeterminados por un pasado imperfecto? Es dialécticamente cómodo e intelectualmente perezoso atribuir el actual desapego de la vida pública a las debilidades de la Transición y no a su desarrollo ulterior, a la gestión posterior de la misma y a los problemas que surgieron, aquí y en otras democracias mucho más consolidadas. Decir: «A mí no me miren, la culpa es de los de antes que no supieron, o no pudieron, o no tuvieron la voluntad o la valentía de ejercer la ruptura como práctica política». Nos dejaron hipotecado nuestro futuro, que hoy es ya presente.

Pero no hay nada asegurado. Los procesos políticos y sociales dependen de la práctica que los anima y de la correlación de fuerzas. En España no existió un

esquema predeterminado de transición (no hubo «pizarra de Suresnes») y se respondió a los obstáculos y conflictos que han ido surgiendo desde entonces con decisiones sobre la marcha, apelando, siempre que ha sido posible, a la perspectiva comparada de los países de alrededor. Decisiones buenas o malas, con distintos protagonistas y con otras generaciones de élites (políticas, económicas, culturales,…) y de ciudadanos que sustituyeron a aquellas y que en la mayor parte de los casos fueron bastante autónomas en sus decisiones. No todos los que participaron en la TE buscaban idénticos objetivos políticos, valores ideológicos y diseños institucionales, aplicando para conseguirlo los mismos esfuerzos y sacrificios.

Charles Powell, otro de los más agudos estudiosos de la TE, ha analizado la relación existente entre la Transición y la democracia resultante, para concluir que no se pueden establecer entre ambas vinculaciones directas, rígidas, de modo mecanicista. No se puede dar por sentado que el futuro de un sistema político queda predeterminado por su base fundacional, descartándose las posibilidades de evolución futura. No es eso lo que dice la experiencia. La naturaleza de la Transición determina solo en una parte las principales características (positivas o negativas) del sistema democrático resultante. Es muy complejo establecer normas de comportamiento entre el punto de partida (el franquismo), la vía seguida (la Transición) y el punto de llegada (la democracia). Es muy dudoso que la calidad de la democracia en España sea inferior a

la de otros países donde la transición de dictaduras a democracias tuvo perfiles distintos o más rupturistas.

La pedagogía atesorada

Explicar estos puntos de vista a las generaciones posteriores a la Transición o a quienes ahora estén interesados por la misma desde otros países que han experimentado, o pueden experimentar, cambios de parecida naturaleza, requería un texto pedagógico, riguroso, sin concesiones a lo políticamente correcto en cada momento, que no cayese en hagiografías heroicas o en las autocomplacencias, pero tampoco en la mezquindad, en el nihilismo, o en esa falta de reconocimiento de lo conseguido que demanda recomenzar una y otra vez, buscando una perfección que jamás existirá, en una especie de adanismo permanente. Ese adanismo está hoy en circulación, motivado por el malestar y el descontento que, como hemos visto, algunos vinculan directamente al pasado anterior. Comenzar desde cero sin heredar de sus ascendientes la experiencia que estos consiguieron acumular durante sus vidas. El filósofo José Luis Pardo cree que entre las actuales generaciones de jóvenes aumenta la sensación de que la experiencia política de sus padres fue un fracaso: no habrían conseguido liquidar realmente al franquismo (y por eso a menudo les escuchamos referirse a las legislaturas amparadas en la Constitución de 1978 como «el régimen»,

para subrayar su paralelismo con la dictadura del general Franco), ni tampoco establecer una democracia real sino únicamente una fachada que disimulaba una trama de banqueros codiciosos, políticos corruptos y periodistas vendidos que habrían aprovechado los últimos treinta años para lucrarse personalmente a costa del pueblo engañado. «Quienes ven las cosas de este modo», escribe Pardo, «se sienten llamados a repetir la experiencia política de sus padres, desde el principio y esta vez con éxito, emprendiendo un proceso constituyente que garantice la Transición definitiva a una democracia auténtica, sin banqueros egoístas, sin políticos deshonestos, sin periodistas tramposos y, sobre todo, sin recortes presupuestarios, incluso aunque para ello tengan que convertirla en una extraña democracia sin banqueros, sin partidos políticos, sin prensa libre y sin presupuestos».

Y aquí entró en juego la suerte: existía ese texto, esa explicación pedagógica de la TE. Su autor es Javier Pradera, editor, periodista, intelectual de izquierdas, hombre de acción. En el año 1992, habiendo acabado ya la Transición y caminando el país por la aburrida normalidad democrática, se le pidió un análisis informado de la misma con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América. Para lectores de ambos lados del océano. Lo publicó en una revista minoritaria, y los que lo leyeron entonces lo consideraron un texto de culto que circuló de boca en boca, y que rompía con muchos de los tópicos dominantes sobre esa etapa histórica, abusivos por banales. Ahora lo re-

cupera el Fondo de Cultura Económica (FCE). No ha sido preciso añadirle ni quitarle una coma. Tiene la virtud de la actualidad y la posibilidad de leerse con nuevas perspectivas a la luz de la coyuntura que nos rodea. Toparse con él es como cruzarte con un viejo amigo al que hace bastante que no ves, y darte cuenta de que, pese al paso de los años, está en forma y su pensamiento y su escritura son plenamente vigentes. Se le lee con admiración. El afortunado reencuentro con Pradera y su estudio sobre la TE recuerda a lo que le sucedió a Fernando Savater con Albert Camus, cuando quiso volver a él. ¡Camus había vencido el paso del tiempo!: «Volvemos a leerle con recelo, casi con miedo […]. Tiembla uno de encontrarle ahora atrasado o blando o mezquino o pomposo o sacristanesco. Con cierta garantía al menos: le recordamos lo suficientemente bien como para saber que no defendió crímenes ni justificó masacres ni se regodeó en el elogio político o estético […] de ninguna forma de crueldad. No padeció la cobardía física que suele empujar a los intelectuales al elogio de la violencia e incluso a lo que Chesterton justamente llamó "el menos viril de los vicios": la fascinación por la brutalidad. Regresamos a sus páginas y se disipan los temores. Algunas discrepancias, ciertos fetichismos lingüísticos ya obsoletos, pero por lo demás Camus no tiene ni una arruga. Más nuestro que nunca: más ecuánime, más valiente, más tonificante y lúcido que jamás. Casi profético, aunque él se hubiese reído de este calificativo degradado por falsos augures».

Javier Pradera ha sido uno de los mejores y más continuos estudiosos de la Transición española de la dictadura a la democracia. Perteneciente a la llamada «generación del 56» —aquella que nació en plena guerra civil (en el caso de Pradera, en 1934) o en el inicio de la posguerra y que se educó en el periodo más duro del franquismo— alcanzó el punto álgido de su madurez intelectual en esos años que van desde 1975 a 1982, que luego se extendió hasta su desaparición física (año 2011). De esa generación se ha dicho que creció sin otro horizonte que el de una dictadura férrea, pobre y solitaria, y que vivió su juventud en uno de los periodos más oscuros y tenebrosos de la historia, que fue obligada a partir de cero, sin pasado y sin memoria, con las solas promesas de un futuro que nunca se le ofreció. Llegó tarde a casi todo y muy pocos salieron ilesos y sin graves quebrantos personales de aquellos durísimos años.

Cómo fue posible que de aquellos oscuros y mediocres mimbres germinasen personajes intelectuales tan notables como Pradera y algunos otros que en distintos grados y lugares protagonizaron la Transición española, es objeto de otros estudios. El hecho es que así fue. No solo por el éxito del proceso sino por las condiciones en la que se desarrolló. El mismo Pradera hubo de vivir bajo el síndrome de un acontecimiento que le marcó desde niño: su padre y su abuelo, con un día de diferencia, fueron asesinados en San Sebastián en 1936 por grupos incontrolados en la retaguardia republicana. Por ello tuvo más valor la apuesta que

hizo de pasarse al bando de los vencidos de la guerra civil y convertirse en uno de los grandes pensadores de la Transición. Hizo suya la idea que desarrolla casi obsesivamente Santos Juliá, en muchos de sus textos: para derribar la barrera divisoria entre vencedores y vencidos de la guerra civil, para reconstruir la mínima comunidad moral en que consiste cualquier Estado democrático, era preciso que gente procedente de los dos lados de la barrera estableciesen una corriente en ambas direcciones para sentarse en torno a una mesa, hablar, negociar y llegar a algún acuerdo sobre el futuro. Pradera reflexiona sobre cómo podían unos y otros juntar fuerzas contra el régimen franquista y proyectar, al mismo tiempo, un sistema de convivencia abarcador de creencias, identidades, ideologías, partidos y clases sociales diferentes sin cerrar previamente el abismo de odios y rencores que había hecho posible la guerra civil. Esto fue lo que sucedió en España con los encuentros entre los hijos de los vencedores y los vencidos (esa «generación del 56») en las universidades desde mediados de los años cincuenta. Lo contó muy plásticamente Pablo Lizcano: en ese tiempo, la Universidad fue el ámbito privilegiado donde dio comienzo una incipiente ruptura contra el enclaustramiento franquista, que amenazaba con suprimir la mitad de España y buena parte de su pasado; en la Universidad nacieron las primeras muestras de contestación y disconformidad, las primeras inquietudes culturales y políticas. «Tanto las que provenían de las fantasías sociales que había sembrado el régimen y que encontraban su fermento en el

SEU (Sindicato Español Universitario), con frecuencia el único cauce universitario para los estudiantes que procedían de familias modestas, como las que dieron pie a una nueva oposición de izquierdas, en general protagonizada por hijos de la aristocracia, la alta burguesía y las grandes familias del régimen».

La tercera ola

La Transición fue la respuesta a la muerte de Franco. En su balance, el Generalísimo de los ejércitos dejaba, además de tres décadas y media de dictadura, mediocridad y marginación de los disidentes, las consecuencias (en números muy conservadores) de la guerra civil: 150 000 muertos en combate, 100 000 víctimas de ejecuciones y asesinatos en la retaguardia entre los años 1936 y 1939, 23 000 republicanos fusilados en la posguerra, 500 000 exiliados, y 270 000 reclusos políticos en 1939. Cifras que conviene recordar y comparar, dadas las dictaduras militares que décadas después asolaron tantos países de América Latina. Ninguna de ellas fue tan cruel y tan masiva como la represión franquista.

El cambio en España coincide con la tercera oleada democratizadora en el mundo, según la teorización hecha por Samuel Huntington. Una ola que surgió en la Europa meridional con la «revolución de los claveles» de Portugal, para saltar después al continente lati-

noamericano y regresar posteriormente a la Europa del sur, central y oriental. En 1991, este politólogo americano publicó *La tercera ola*, ensayo en el que analizaba lo sucedido en una treintena de países entre los años 1974 y 1990. Para Huntington, una ola de democratización es un conjunto de transiciones de un régimen autoritario a otro democrático que ocurren en determinado periodo de tiempo y que superan significativamente a los movimientos en sentido opuesto (involucionistas) durante ese mismo periodo. La primera ola se da entre 1828 y 1926 y corresponde, básicamente, al inicio de las revoluciones norteamericana y francesa, con la aparición de las instituciones democráticas. La segunda ola se origina entre la II guerra mundial y principios de los años sesenta del siglo pasado. Gracias a la victoria aliada se facilitó la democracia en países como Alemania, Italia o Japón. La tercera ola es la que incorpora la Transición española. Huntington indica premonitoriamente que en el horizonte a largo plazo de esta tercera oleada existían riesgos como la añoranza del marxismo en países que pasaban, sin solución de continuidad, del socialismo real a un capitalismo ultraliberal; la aparición de una crisis económica en la que los ciudadanos reclamasen más seguridad y menos riesgo; la vuelta al autoritarismo en Rusia, la India o China; revueltas en los países islámicos, etcétera… Casi todos ellos han tenido lugar. Unos años después hizo una autocrítica de algunas de estas posiciones, cuando publicó su siguiente y muy polémico ensayo, *El choque de civilizaciones.*

Numerosos historiadores han descrito cómo, aunque la Transición española no se inició hasta la muerte del dictador, algún tipo de transición ya estaba presente en las mentes de bastante gente desde mucho antes. Santos Juliá cuenta cómo tan solo nueve años después del final de la guerra civil, en agosto de 1948, una delegación del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el exilio llegaba a un acuerdo con representantes de la Confederación Española de Fuerzas Monárquicas, en San Juan de Luz, sobre un programa de ocho puntos para una transición pacífica de la dictadura a la democracia. Entre la caída de Franco y la consulta que habría de determinar la futura forma de Estado, monárquicos y socialistas contemplaban dos medidas fundamentales: «dictar una amplia amnistía de delitos políticos» e «impedir todo género de venganzas y represalias por motivos religiosos, sociales o políticos». En un artículo publicado en 2014, el mismo historiador subraya que en 1975 (año de la muerte de Franco) todo el mundo que militaba en partidos políticos y grupos ilegales o clandestinos, desde liberales a comunistas, estaba de acuerdo en que a la pregunta «después de Franco, ¿qué?» (formulada en 1961 por Dionisio Ridruejo, y más adelante por Santiago Carrillo —secretario general del Partido Comunista de España— como título de un libro publicado en Francia en 1966), la única respuesta posible era: después de Franco, un periodo, un proceso, una fase de transición. La democracia considerada como un proceso que no termina nunca de asentarse, no como un acontecimiento puntual.

Los que hicieron la Transición buscaban para España un sistema político democrático y un capitalismo comparables a los ya existentes en Europa Occidental, con sus fortalezas pero conscientes también de sus defectos. Querían de Europa, básicamente, su sistema de libertades y su modelo económico y social, expresado en la universalización del Estado de bienestar. Pretendían que algún día los ciudadanos españoles, capados por tanta autarquía y ensimismamiento, pudieran repetir algo parecido al espíritu del discurso que el primer ministro británico Harold MacMillan pronunció en el estadio de fútbol de Belford, en julio de 1957: «Seamos sinceros, a la mayoría de nosotros nunca nos ha ido tan bien como ahora. Recorred el país, las grandes ciudades, los pueblos pequeños, y encontraréis un bienestar que jamás habéis visto antes al menos en la historia de este país». Esta era la manifestación cotidiana de la utopía europea.

La experiencia de la II República

El proceso modernizador que comienza el año 1975 era el segundo que se acometía en España durante el siglo xx, tras la II República (1931-1939), que tan efímera resultó por mor del golpe de Estado sangriento contra ella. La historia del siglo xx en España no es precisamente la historia de una normalidad estable:

23 años de monarquía constitucional no democrática, siete de monarquía con dictadura, ocho de republica de los cuales tres se desarrollaron en guerra civil, 36 de dictadura franquista, siete de transición hacia una sociedad de libertades y 19 de democracia. Las condiciones socioeconómicas en las que se desarrolló la TE, aun siendo muy complicadas no llegaron al grado de dificultad que tuvieron en el primer proceso modernizador republicano.

Inicialmente, debido a que los protagonistas de la TE tuvieron muy en cuenta la experiencia de los años treinta en España. En el mes de enero de 1976, recién muerto el dictador, Madrid era sacudido por un gigantesco movimiento huelguístico que pronto se extenderá al resto de España. Los efectos de la primera crisis del petróleo (escasez y subida de precios), que había llegado al mundo en el otoño de 1973, se visibilizan con dureza en las vidas de los ciudadanos: inflación, paro, cierre de empresas, parálisis de la economía,… Otra vez la pesadilla de un cambio de régimen inmerso en una crisis económica. Mientras los países del entorno geográfico español hacía casi dos años que habían comenzado a apretarse el cinturón ante las dificultades externas y así domeñar la crisis cuanto antes, los últimos gobiernos de Franco no habían tenido la fortaleza política ni la visión económica necesaria para pedir sacrificios a sus ciudadanos. Les faltaba legitimidad. Cuatro dirigentes del Partido Comunista de España publican poco después un libro de intervención inmediata en que el que describen

su versión de lo que está ocurriendo. Quizá haya que descontar en ella un poco de voluntarismo militante, pero es representativa de aquellos momentos: «Durante dos meses, Madrid ha sido el escenario de un movimiento huelguístico que ha afectado a todas las ramas de la producción y a numerosos servicios públicos. La ciudad se ha quedado prácticamente sin taxis, sin metro, sin correspondencia. Las manifestaciones se han sucedido en todos los puntos de la capital y de la periferia industrial. Durante semanas, decenas de miles de trabajadores se han venido reuniendo a diario en asambleas en las que discutían el curso de su acción… Decenas de conflictos estallaban y se apagaban sin que la huelga dejara de crecer. El sindicato oficial se veía desbordado con convocatorias lanzadas desde sus propios órganos comarcales y provinciales». Los autores del texto interpretan más adelante el sentido de la propia gran movilización tras la desaparición de Franco: «Hay que explicarla a la luz del cambio que ha producido en el clima político del país la muerte del general Franco. Porque la huelga de Madrid hay que considerarla en realidad como parte destacadísima del esfuerzo de la oposición democrática para plantear la ruptura frente a la tentación continuista, evolucionista o reformista presentada por el Gobierno. Porque la huelga ha sido tanto un acto representativo como un acto político. Claro está que en su desencadenamiento y desarrollo han tenido importancia capital las reivindicaciones salariales de empresa, y la oposición general a los topes salariales».

El economista José Víctor Sevilla, que fue secretario de Estado de Hacienda en el primer Gobierno socialista de Felipe González, escribe que es en este periodo cuando las presiones salariales alcanzan sus niveles máximos: «En ese momento, la lucha obrera y la presión sindical tienen un significado esencialmente político. Nadie se planteaba entonces los problemas que podría catalizar una elevación salarial, precisamente cuando los primeros efectos de la crisis ya se estaban sintiendo. Sin embargo, ese comportamiento salarial, reflejo de una correlación de fuerzas favorable a la clase obrera, acabaría sepultando definitivamente al modelo de crecimiento de los años sesenta, abriendo una brecha entre el nivel de salarios alcanzado y la capacidad del aparato productivo para satisfacerlo». La experiencia de los años 1931 a 1936 (los de la república sin guerra civil) demostraba que una crisis económica grave y no resuelta es una dificultad que complica, hasta hacerla a veces imposible, la construcción de la democracia. Un político español dijo en el año 1932: o los demócratas acaban con la crisis o la crisis acaba con la democracia.

Había que asumir esa pasada historia española para no estar condenados a repetirla. En 1931, la Gran Depresión acompañó a la oportunidad democrática y modernizadora de la II República; esta era la mayor diferencia entre la crisis económica española y la que afectaba a otros países europeos. Era necesario conceder la máxima prioridad política a la economía. El socialista Indalecio Prieto, ministro de la República,

escribió en sus *Convulsiones de España:* «No entender políticamente el mundo de la crisis económica y no presentar ante él una política económica coherente constituyó una de las causas del fracaso de la II República».

Aunque había similitudes, las diferencias entre los años treinta y la segunda parte de los años setenta del siglo pasado son muy notables, tanto desde el punto de vista político como económico. La cuestión era cómo legitimar un régimen y asentar una democracia estable que toleraba una inflación que superaba en los meses centrales de 1977 —julio y agosto— el 42 %. El vicepresidente económico durante parte de aquellos años, Enrique Fuentes Quintana, se preguntaba: ¿cómo asentar una democracia estable si esta carecía de recursos para mantener sus intercambios con el exterior? ¿Cómo afianzar la vida económica de una sociedad que había ignorado la pavorosa crisis energética que había cambiado los hábitos y los comportamientos de todos los países occidentales menos del nuestro? ¿Cómo construir una convivencia estable sobre una estructura productiva heredada del pasado e irremediablemente dañada en muchos de sus sectores industriales por la crisis, y que habría que reconvertir? En definitiva: ¿cómo edificar una sociedad democrática avanzada con un sistema económico que poco tenía que ver con la economía social de mercado que regía en todos los países occidentales?

La respuesta fueron los Pactos de la Moncloa. El 15 de junio de 1977 se celebran las primeras elecciones

generales democráticas en España desde el 16 de febrero de 1936. Unión de Centro Democrático (UCD) las gana con una mayoría relativa, y el primer partido de la oposición es el socialista (Partido Socialista Obrero Español). Predomina la idea de que el más urgente problema político español es el económico. Únicamente resolviendo este se podría llegar con tranquilidad a la elaboración de una Constitución: las reglas del juego de la democracia. Según Fuentes Quintana, Adolfo Suárez, el presidente de Gobierno, «era consciente de que después de la alegría de las elecciones del 15 de junio de 1977 tenía que comunicar a los ciudadanos la catastrófica situación económica y la cirugía necesaria para salir de ella». La experiencia de la II República, ya lo hemos dicho, como algo que no habría que repetir. Una reflexión, muchas veces velada y pocas explícita, que asiste como en una balconada a todo el desarrollo de la TE. Asumir la historia pasada para no estar condenados a repetirla obligaba a reconocer que una economía en crisis constituía un problema político fundamental y prioritario, cuya respuesta no podía posponerse por los actores políticos sino al coste inaceptable de sacrificar la construcción de la democracia. Los múltiples ejemplos disponibles de fracasos de las democracias contemporáneas en muchos países apuntaban en la misma dirección. La consolidación de un régimen democrático exige, a la vista de estas experiencias, el cumplimiento de dos condiciones: la primera, la creencia mayoritaria de la población en la legitimidad del régimen, que debe apreciarse por su

capacidad para dar soluciones rápidas a los problemas clave de la sociedad. Si la agenda de los problemas no se elige bien, y si no existe una colaboración de las principales fuerzas que apoye de modo conjunto la solución de los problemas elegidos, se corre el riesgo de que al desencanto de muchos ciudadanos, alentado por la pervivencia y la gravedad de los problemas, siga la indiferencia y la hostilidad hacia el régimen democrático. La segunda condición es la capacidad de los líderes políticos para limitar la difusión de una oposición que sea desleal y para evitar los asaltos constantes de esa oposición.

La gravedad de la coyuntura económica en los años setenta obligaba a su reconocimiento por parte de los partidos políticos, y a limitar las críticas y las demandas frente a esa crisis. Ello es polémico y no todo el mundo (sobre todo desde posiciones de la izquierda radical, muy minoritarias) estaba de acuerdo. Una crisis grave, en un momento de transición, reclama el apoyo de todas las fuerzas políticas para la solución conjunta de los problemas elegidos. La crisis planteaba problemas en cuya solución podía jugarse de forma definitiva la legitimidad del sistema democrático, que para ganarla debía dar respuestas eficaces a las dificultades planteadas. Esa respuesta fueron los Pactos de la Moncloa, acordados por todos los partidos políticos que habían obtenido representación parlamentaria en las elecciones de junio de 1977, desde la derecha postfranquista hasta la izquierda comunista, pasando por el centro, los nacionalistas y los socialistas.